

0056/2023

El presente proyecto de Real Decreto trae causa inmediata de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual, cuyo art. 39 recoge la creación de un Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y de prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual. La Exposición de Motivos del Proyecto expone que la vocación con la que nace dicha ley es la de trasponer la Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviembre de 2018, en algunos de cuyos artículos hace referencia a que los Estados Miembros establecerán y mantendrán actualizada una lista de los prestadores de servicios de comunicación (art. 2.5ter), o de prestadores de plataformas de intercambio de vídeos establecidos en su territorio (art. 28bis.6).

Pues bien, el art. 39 de la Ley 13/2022 crea, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Registro estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual, de prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y de prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual.

Ello conlleva, ciertamente, tratamientos de datos que pueden ser personales, si afectan a una persona física (art. 4.1 RGPD), tanto en cuanto a su comunicación al citado Registro, como a u posible comunicación a terceros interesados.

La ley 13/2022 ha llevado a cabo, por esto mismo, una regulación muy completa de los posibles tratamientos de datos personales derivados tanto de los tratamientos que se lleven a cabo a consecuencia de dicha ley, como específicamente en relación con dicho Registro, en su **Disposición adicional cuarta. Protección de datos de carácter personal**, cuya redacción es la siguiente:

- 1. El tratamiento de datos personales regulado en la Ley se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.*
- 2. El tratamiento de los datos personales relativos al Registro estatal a que se refiere el artículo 39, así como la comunicación de datos del*

registro a terceros tiene como base jurídica el cumplimiento de la obligación legal que corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de mantener un listado con los prestadores de servicios de comunicación audiovisual y de servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma que deberá ser comunicado periódicamente a la Comisión Europea. Asimismo, el tratamiento de datos por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la cesión de datos por parte de este Ministerio a terceras Administraciones públicas tiene como base jurídica el cumplimiento de una misión de interés público y el ejercicio de poderes públicos.

Estos datos solo serán comunicados a las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos.

*3. En cumplimiento del principio de minimización, se **inscribirán** en el Registro estatal los siguientes datos personales tanto de representantes como de los titulares de participaciones significativas en el capital de los prestadores de servicios de comunicación audiovisual o de servicios de intercambio de vídeo a través de plataforma: Nombre y apellidos, domicilio, **Documento Nacional de identidad o pasaporte**, correo electrónico, y teléfono.*

4. La finalidad del Registro estatal es facilitar el conocimiento de los agentes prestadores de los servicios contemplados en esta ley en orden a garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en ella.

5. La fuente de los datos a incorporar en el Registro estatal serán los prestadores del servicio de comunicación audiovisual, los prestadores del servicio de intercambio de vídeos a través de plataforma y los prestadores del servicio de agregación de servicios de comunicación audiovisual.

6. La información sobre Registro estatal en la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital incluirá una cláusula informativa de tratamiento de datos conforme a lo previsto en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Los prestadores del servicio de comunicación audiovisual que faciliten información al Registro estatal tendrán la obligación de facilitar previamente esa información a las personas afectadas conforme al artículo 13 de dicho Reglamento.

7. Los datos del Registro estatal serán públicos, de libre acceso y reutilizables en los términos establecidos en el artículo 40.

8. El responsable del tratamiento será el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que garantizará la aplicación de las medidas de seguridad preceptivas que resulten del correspondiente análisis de riesgos, teniendo en cuenta que dichos tratamientos serán realizados por Administraciones públicas obligadas al cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

9. Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades previstas en esta ley, así como para atender responsabilidades administrativas y jurisdiccionales relacionadas con su tratamiento.

10. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y cancelación en relación con los datos de carácter personal se podrá efectuar en los términos establecidos en la normativa de protección de datos de carácter personal, con las excepciones y limitaciones previstas en ella.

Esto es, la ley 13/2022 contiene un reconocimiento general a que la normativa de protección de datos se aplica a las actividades derivada de la misma.

En relación con el proyecto de Real Decreto sometido ahora a informe, su artículo 7 contiene una referencia a la normativa de datos personales que, en esencia, reitera la regulación de rango superior recogida en la Ley 13/2022, que dice así:

Artículo 7. Publicidad formal del Registro Estatal y protección de datos de carácter personal.

1. Los asientos registrales serán públicos y de libre acceso para su consulta por cualquier persona, a través de la sede electrónica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con los límites establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales y la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

2. Los asientos registrales serán reutilizables, de conformidad con lo previsto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

3. El tratamiento de datos personales regulado en el presente real decreto se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 13/2022, de 7 de julio, en el Reglamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

Esta Agencia desea llamar la atención sobre el régimen de publicidad de los asientos, por cuanto si bien la Disposición adicional cuarta de la ley, citada, se remite al art. 40 de la ley, esta hace exclusivamente referencia a los “límites” que se derivarían de la legislación de Transparencia o de la LOPDGDD, lo cual, sin dejar de ser ciertamente aplicable, podría concretarse en alguna limitación más específica adecuada a la situación (como ya ha puso de manifiesto, por ejemplo, la CNMC en su comentario al art. 7 del Proyecto en su Informe IPN/CNMC/004/23, cuyas conclusiones se recogen en la página 36 de la MAIN aportada).

Así, en cuanto al régimen de *publicidad* de los datos personales que constan en el citado Registro, esta Agencia, al igual que ya se ha planteado por los propios prelegisladores redactores de proyectos similares, sugiere que esa publicidad, respecto de las personas físicas, no alcance a la comunicación a terceros (tratamiento de dato personal) de los datos personales que no sean *estrictamente necesarios* a la función que cumple el Registro, cuestión esta por otra parte que correspondería determinar al prelegislador, llevando a cabo incluso un análisis de los riesgos de dicho tratamiento o incluso, si fuera necesario, una evaluación de impacto. Específicamente, quizás la puesta a disposición del público, a través del Registro, de datos de DNI, estado civil o domicilio de personas físicas deba ser considerado. Una posible redacción podría ser:

X. La publicidad del Registro no alcanza a los datos referidos a los domicilios de las personas físicas, estado civil, Documento Nacional de identidad o pasaporte, u otros datos de carácter personal que consten en la documentación de cada entidad, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y el resto de normativa de protección de datos de carácter personal, siempre que no sean imprescindibles para el cumplimiento de la función del propio Registro.

Esta Agencia considera que dicha concreción reforzaría el principio de minimización de datos previsto en el art. 5.1.c) RGPD. Esta Agencia coincide en que sería conveniente, como señala la CNMC en el Informe citado (ver pág. 36 de la MAIN) *[p]recisar motivadamente qué datos concretos serán accesibles al público en general, de entre los señalados en la D. Adicional 4ª.3 LGCA (...).*